



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 179

Medellín, veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, *"Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones"*, promovido por **LUZ AMPARO MALDONADO SANTAMARÍA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES** con radicado No. 05001-31-05-013-2018-00261-01.

A continuación, la Sala conformada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES como magistrado ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 045 de discusión de proyectos, adoptó la decisión que se consigna enseguida:

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1 DE LOS HECHOS

Manifestó la demandante que nació el 12 de junio de 1959; que se encuentra afiliada al RAIS a través de COLFONDOS S.A.; que por sus

condiciones de salud y falta de empleo estable, solicitó pensión de vejez ante COLFONDOS S.A., negándosele la prestación por resultaba insuficiente el saldo de la cuenta de ahorros para financiar la prestación, concediéndole la devolución de saldos; continuó expresando que desde el año de 2007 presenta deterioro en su estado de salud, causado por múltiples afecciones; que en diciembre de 2017 solicitó un dictamen médico pericial a la universidad CES de Medellín, el cual arrojó como resultado una pérdida de capacidad laboral de 55.84% con fecha de estructuración del 12 de enero de 2015; cuenta que acredita un total de 870 semanas en la historia laboral reportada por COLFONDOS, y que cuenta de 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la citada fecha de estructuración, lo que le da derecho a disfrutar la pensión de invalidez; razón por la cual reclamó la prestación sin que la administradora le haya dado repuesta a su solicitud.

## **1.2 DE LAS PRETENSIONES**

Con base en los hechos expuestos solicita que se declare que es una persona invalida por acreditar una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, desde el 12 de enero de 2015, fecha de su estructuración; retroactivo, intereses moratorios o subsidiariamente la indexación de las condenas y costas procesales.

## **1.3 DE LA RESPUESTA**

**COLFONDOS S.A.** a través de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demandada formulando como excepciones de fondo: PRESCRIPCIÓN; FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO DEBIDO, FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CARENCIA DE ACCIÓN Y AUSENCIA DE DERECHO; PETICIÓN ANTES DEL TIEMPO Y COMPENSACIÓN.

Posteriormente el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante auto interlocutorio No. 428 del 18 de febrero de 2019, resolvió admitir el llamamiento en garantía realizado por la accionada frente a SEGUROS BOLÍVAR S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Por su parte **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.** por medio de apoderado judicial se manifestó en contra de las pretensiones de la demandante, formulando como medios exceptivos: FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Y PASIVA; IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS; NO AGOTAMIENTO RECLAMACIÓN PREJUDICIAL; PAGO Y/O COMPENSACIÓN y PRESCRIPCIÓN.

A su vez frente al llamamiento en garantía presentó como excepciones de mérito: CLÁUSULAS QUE RIGEN EL CONTRATO DE SEGURO; INEXISTENCIA DE CONTRATO PARA LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ; INEXISTENCIA DE LA RECLAMACIÓN ANTE LA ASEGURADORA; INOPONIBILIDAD DEL DICTAMEN PERICIAL.

De otro lado, la **COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.** por medio de su apoderado judicial se pronunció en contra del llamamiento en garantía y a lo pretendido en la demanda principal, proponiendo como excepciones de mérito: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A POR NO EXISTIR COBERTURA; FALTA DE CAUSA PARA LLAMAR EN GARANTÍA; FALTA DE CAUSA PARA PEDIR; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR PENSIÓN DE INVALIDEZ; RESTITUCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS O COMPENSACIÓN; SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA; SUMA ADICIONAL; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS, INDEXACIÓN, COSTAS; PRESCRIPCIÓN; GENÉRICA E INNOMINADA.

#### **1.4 DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

El JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante sentencia del 25 de agosto de 2021, DECLARÓ que la señora LUZ AMPARO MALDONADO SANTAMARÍA tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de la invalidez de origen común; CONDENÓ a COLFONDOS S.A. a reconocer y pagar a la demandante, la suma de \$120'259.448 a título de retroactivo liquidado desde el 22 de febrero de 2015 hasta agosto de 2021. Inclusive a pagar una mesada pensional equivalente a la suma de \$1.578.250, sin perjuicio de una mesada adicional de diciembre y los incrementos de ley mientras permanezca en estado de invalidez; AUTORIZÓ a COLFONDOS S.A. a efectuar los descuentos respectivos, con destino al sistema de seguridad social en salud; CONDENÓ a COLFONDOS

S.A. a reconocer y apagar a la demandante la indexación de las mesadas pensionales; ABSOLVIÓ a COLFONDOS S.A. de las demás pretensiones incoadas en su contra; DECLARÓ probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos causados y exigibles con anterioridad al 22 de febrero de 2015; DECLARÓ probada la excepción de compensación y en consecuencia autorizó a COLFONDOS S.A. a descontar del retroactivo pensional la suma de \$120.010.621 recibida por la demandante por concepto de devolución de saldos, debidamente indexada al momento de hacer efectiva la compensación. Las demás excepciones propuestas por COLFONDOS S.A. las DECLARÓ improbadas; ABSOLVIÓ a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR y a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. de la totalidad de pretensiones de los llamamientos en garantía; sin costas en esa instancia.

### **1.5 IMPUGNACIÓN**

La apoderada de **COLFONDOS S.A.** interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida en primera instancia, la cual condenó a su representada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, poniendo de presente la diferencia que el sistema general de pensiones establece en los regímenes de pensiones existentes, en donde destaca la diferencia del RAIS con el RPM, el cual no se basa en la existencia de un fondo común, sino en cuentas de ahorro individual en las que cada afiliado aportará toda su vida laboral; en igual sentido, señala que, aunque ambos regímenes cubren los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lo hacen atendiendo reglas leales y principios financieros diferentes, establecidos en el artículo 60 de la ley 100 de 1993, el cual indica que, el reconocimiento, cuantía y pago por los riesgos antes mencionados, dependerá de los aportes realizados por los afiliados y empleadores, rendimientos financieros y subsidios del Estado cuando a ellos hubiere lugar; adicionalmente subraya que, el artículo aludido, establece que, se destinará un porcentaje al pago de prima de seguros previsionales, con el fin de atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, la asesoría para la contratación de renta vitalicia y cubrir el costo de la administración; de otro lado manifiesta que, para poder acceder en una pensión por vejez en cualquier tiempo, se debe tener el capital suficiente para financiar el 100% de una mesada de un salario mínimo legal mensual vigente, situación que destaca, no se dio en el presente caso, pues se pudo establecer que la demandante solicitó a COLFONDOS el

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, pero por no cumplir con los requisitos exigidos se procedió a la devolución de saldos; manifiesta así mismo que, cuando se trata de una de una pensión de invalidez o sobrevivencia, la situación es totalmente diferente según lo establecido en el artículo 77 de la ley 100 de 1993, en donde se prescribe que el reconocimiento de dichas pensiones se hará con los aportes realizados por el afiliado y que el saldo faltante para el financiamiento de ésta lo aportaran las aseguradoras; también hace referencia al artículo 108 de la misma ley, el cual se refiere a los seguros contratados por las administradoras para efectuar los aportes necesarios para financiar pensiones de invalidez y los lineamientos dados por la superintendencia financiera para la contratación de éstos. En igual sentido narra que, la demandante no cumplió con la reclamación formal, la cual implica una actividad previa exigida a la parte del titular del derecho al momento de solicitar la pensión de invalidez con la finalidad de determinar si cumple con los requisitos para su reconocimiento, ya que como está diseñado el sistema general de pensiones se debe cumplir con el lleno de unos presupuestos ante la aseguradora previsional contratada, para que pueda asumir el pago del siniestro ocurrido, sumando el capital faltante para financiar la pensión correspondiente. Por último, advierte que la demandante deberá devolver todos los saldos que le entregó COLFONDOS, debidamente indexados, los cuales corresponden a un giro realizado a su patrimonio el 13 de febrero de 2017 por monto de \$120'010.621 y otro realizado el 09 de octubre del mismo año por la suma de \$ 5'293.689; en estos términos solicita sea revocada la sentencia en primera instancia.

### **1.5 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término oportuno, el apoderado de la **COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.** presentó alegatos de conclusión solicitando la absolución de su representada y la confirmación íntegra del fallo de primera instancia, rememorando que la accionante fue valorada en única y primera oportunidad por el laboratorio de la universidad CES, quien determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50% con fecha de estructuración del 12 de enero de 2014 de origen común; dictamen que resalta fue realizado sin la participación de la AFP COLFONDOS S.A. ni la aseguradora previsional, transgrediendo lo establecido por los parámetros legales. Así mismo manifiesta que La Compañía Seguros Bolívar S.A. no

está llamada a responder por suma alguna como acertadamente lo concluyó la A quo, por no encontrarse vigente la póliza de seguro previsional entre su representada y la AFP COLFONDOS S.A. en la fecha de estructuración de la invalidez de la actora, tornándose inoperante en ese sentido el llamamiento en garantía realizado a su defendida.

Dentro de la oportunidad procesal pertinente el apoderado judicial de **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.** formuló alegatos de conclusión, advirtiendo que independientemente de cualquier decisión, su defendida no debe salir comprometida en ninguna forma, subrayando que el dictamen allegado por la actora fue realizado por Cendes, entidad que no se encuentra autorizada o habilitada para determinar la pérdida de capacidad laboral conforme al artículo 41 de la ley 100 de 1993, quien realiza la valoración sin contar con un equipo interdisciplinario de profesionales especialistas, como si lo tienen las entidades autorizadas, de lo que destaca que, el perito que calificó a la accionante, se atrevió a hacerlo sin ser especialista en áreas como reumatología y cardiología, conceptos que indica no pueden ser tenidos en cuenta. De otro lado afirma que la actora no ha surtido el proceso señalado legalmente para determinar su grado de invalidez, ni ha acudido a la AFP con el propósito de iniciar el proceso de calificación, sino que se acercó inicialmente solicitando su pensión de vejez, petición que se resolvió desfavorablemente por no cumplir con los requisitos para ello, razón por la que la AFP le devolvió los aportes pensionales y rendimientos el 9 de octubre de 2017, quedando su cuenta de ahorro pensional en ceros, significando entonces que es inviable el reconocimiento de la nueva prestación perseguida por no existir fondos para su financiación, adicional a que su supuesta invalidez está sustentada en un dictamen de una entidad sin competencia para esa valoración. Finaliza esbozando que, en caso de confirmarse la decisión se deberá absolver a su representada, teniendo presente que, a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es el 12 de enero de 2015, no puede afectar la póliza por encontrarse por fuera de la vigencia del contrato de seguro.

## **2 CONSIDERACIONES**

Procede la Sala de Decisión a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por COLFONDOS S.A., advirtiendo que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del Código Procesal

del Trabajo y la Seguridad Social, el estudio del fallo recurrido se limitará a los puntos de inconformidad.

## **2.1 PROBLEMA JURÍDICO.**

Sea lo primero indicar que el recurso de alzada no es claro ni coherente respecto del punto de inconformidad de la sentencia de primera instancia, por lo que se analizara únicamente lo concerniente a la compensación de la condena, teniendo en cuenta la devolución de saldos de la pensión de vejez otorgada a la demandante LUZ AMPARO MALDONADO SANTAMARIA.

## **2.2 HECHOS PROBADOS.**

Que la señora Luz Amparo Maldonado Santamaria nació el 12 de junio de 1959, como se puede apreciar en copia de cédula de ciudadanía (01Expediente.pdf pág. 78); que el 13 de enero de 2017, presentó ante COLFONDOS solicitud de pensión de vejez, en el que a su vez autorizó que en caso de proceder la objeción de la prestación se procediera con la devolución de saldos (01Expediente.pdf págs. 142 a 146); que recibió respuesta por parte de COLFONDOS S.A. a su solicitud en comunicado del 2 de febrero de 2017, en la que se le informó que no cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la prestación por vejez, debiéndosele devolver los saldos de la cuenta (01Expediente.pdf págs. 154 y 155); decisión que a su vez respalda diligenciando el 8 de febrero de 2017, el formulario de devolución de saldos (01Expediente.pdf págs. 156 a 158); siendo consignado a favor de la actora la suma de \$120'010.621 el 13 de febrero de 2017 y \$5'293.689 el 9 de octubre de esa misma anualidad (01Expediente.pdf págs. 161 y 162); que la accionante ante sus quebrantos de salud fue calificada por la universidad CES, dictaminándosele una pérdida de capacidad laboral de 55,84% con origen común y fecha de estructuración del 12 enero de 2015 (01Expediente.pdf págs. 59 a la 71 y 83 a la 93), que el 22 de febrero de 2018, radicó ante Colfondos S.A. solicitud de reconocimiento de pensión por invalidez (01Expediente.pdf págs. 72 y 73); prestación que le fue negada en comunicado del 22 de marzo de 2018, indicándole que ya había sido beneficiaria de la devolución de saldos y que no había compatibilidad entre esa prestación económica y la pensión solicitada (01Expediente.pdf págs. 163 y 164).

## **2.3 MARCO NORMATIVO**

Sea lo primer indicar, que si bien no fue objeto de apelación el dictamen emitido por la universidad CES, y el cual le sirvió de soporte a la juez de primera instancia para dictaminar la invalidez de la accionante, no está de más indicar que al igual que la a quo, esta sala encuentra que el experticio reviste de total validez.

Lo anterior, en razón de que los apoderados de las llamadas en garantía en sus alegatos de conclusión manifestaron su inconformidad con respecto a esta evaluación médica, que le dictaminó a la señora LUZ AMPARO MALDONADO SANTAMARIA una pérdida de capacidad laboral del 55.84% de origen común, estructurada el 12 de enero de 2015 (expediente folio 61 a 71)

Al respecto, argumentaron los apoderados de los intervinientes que la entidad que realizó el experticio, carece de autorización para dicho trámite, ya que no se contó con un equipo profesional interdisciplinario de expertos como se exige para ese tipo de valoraciones, además de que el médico que realizó el dictamen, calificó patologías de materias en las que no era especialista; posición que no comparte esta sala, ya que el funcionario judicial tiene competencia para examinar los hechos demostrados en el juicio y establecer el grado de invalidez del afectado. Así que los dictámenes de las entidades del sistema de seguridad social no son medios probatorios solemnes, no estando sometido el juzgador en su valoración a la tarifa legal de pruebas, por lo que puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad, conforme al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, situación que se da en el sub examine, al existir evidencia suficiente para tomar una decisión soportada en un estudio serio realizado por la UNIVERSIDAD CES, que se ciñe a lo establecido legalmente para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la intervención de un médico profesional experto y certificado para ello; amen de lo anterior, es importante destacar, que jurisprudencialmente el juez no está vinculado tampoco a determinado dictamen, sino que puede ante la presencia de varios dictámenes elegir en cual va a fundamentar su decisión, situación que ha sido estudiada por nuestro órgano de cierre en pronunciamientos recientes SL 3719 de 2019 y SL 2615 de 2021, que a la letra dice:



*"La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, ha tenido la oportunidad de señalar que ante la pluralidad de dictámenes disímiles el juez podrá escoger para fundamentar **su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad analizado dentro del conjunto de elementos probatorios con los que cuente, todo dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.***

*Lo anterior, en armonía con las disposiciones que regulan los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez, concretamente el mencionado Decreto 2463 de 2001, que en el artículo 35 estipula que ellos son controvertibles ante los jueces del trabajo y en el artículo 40 que establece que las actuaciones de la junta no constituyen actos administrativos por lo que en estricto rigor y para efectos de la valoración probatoria que ha de realizar el juez dentro de la actuación judicial no están sometidos a la jerarquización propia de los procedimientos administrativos (SL 3719 de 2019).*

*Se reitera, además, que, en estos eventos, conforme lo dispuesto en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el funcionario judicial en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, puede apreciar libremente los diferentes medios de convicción. Igualmente, como se adoctrinó en la sentencia CSJ SL2049-2018, la formación del libre convencimiento con el principio de la sana crítica, implica que aquel debe fundar su decisión en aquellos elementos probatorios que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables.** (CSJ SCL 4823 2019, SL 1221-2021)".*

Razones más que suficientes que nos llevan a concluir que no les asiste razón a los apoderados de las llamadas en garantía, en sus alegatos, pues el dictamen de la universidad CES reviste como ya se dijo, de total validez e idoneidad.

Continuando con el análisis de este litigio, y analizado detenidamente en el recurso de alzada, encontramos que los argumentos expuesto por la abogada del fondo privado, no ataca la sentencia de primera instancia, ni da explicación alguno de la que se pueda inferir su desacuerdo con la pensión de invalidez concedida por la a quo, pues su tesis radica principalmente en la diferencia que existe en la fuente de financiación en las prestaciones en uno (RPMPD) y otro régimen (RAIS).

Encontrando este cuerpo colegiado que el único punto que resulta viable ser estudiado en esta instancia, es el concerniente a la devolución de los saldos que le entregó COLFONDOS a la actora, los cuales solicita que se le restituyan debidamente indexados.

Al respecto debemos decir, que en este punto le asiste derecho a la apoderada del fondo, pues nuestro órgano de cierre en sentencias SL 5698

de 2020 y SL 5037 del mismo año, entre otras, señala que las aseguradoras del retroactivo a pagar al asegurado o a los causabientes por concepto de pensión de invalidez o sobreviviente, puede descontar las sumas pagadas por indemnización sustitutiva o devolución de saldos, a fin de evitar un detrimento económico a la entidad de seguridad social.

Así las cosas, encontramos en la foliatura 159 a 162, el soporte de pago realizado a la accionante MALDONADO SANTAMARIA por concepto de devolución de saldos, efectuando el fondo de pensiones dos pagos a su favor, el primero de ellos, en el mes de febrero de 2017 por valor de **\$120´010.621**, el cual fue ordenado por la a quo descontar del retroactivo consolidado a favor de la actora; dejando por fuera un segundo pago realizado el mes de octubre de 2017 por valor de **\$5.293.689**, lo que nos llevará a modificar este punto de la sentencia, ya que se ordenará descontar del retroactivo de la pensión de invalidez de la accionante LUZ AMPARO MALDONADO SANTAMARIA el consolidado de \$125´304.310 debidamente indexada.

Ahora bien, continuando con el análisis del recurso de apelación debemos indicar que este debe ser adecuado y apropiado al caso, lo cual implica determinar las razones de disenso con lo decidido, es decir, presentar una verdadera controversia que implique la confrontación de la sentencia apelada; no introducir nuevos planteamientos o exponer un desacuerdo genérico y presentar argumentos claros, puntuales y lógicos de los cuales se derive el alcance de la oposición y los aspectos que abarca la misma, siendo su deber y obligación sustentar el recurso de apelación.

Y ello es así, por cuanto el instituto jurídico de los recursos, tiene como fin, que el juez o su superior jerárquico, dependiendo del recurso de que se trate, reposición o apelación, examine la decisión adoptada para que, de considerarlo pertinente la modifique o revoque. Sin embargo, es obligación de las partes sustentar en debida forma los recursos, atacando las razones del juez para proferir la decisión, lo que por demás delimita la competencia del Juez superior, en la medida en que sólo podrá manifestarse en relación con los aspectos señalados en el recurso.

Sobre el alcance de la exigencia de atacar en la sustentación del recurso de apelación los argumentos del juez para conceder o negar un derecho, se ha

pronunciado nuestro órgano de cierre, trayendo a colación la sentencia SL2010-2019 Radicación n.º 45045 del cinco (05) de junio de dos mil diecinueve (2019). MP RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO, de la que se extrae:

"...En iguales términos, antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 2007, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 del CPTSS, en concordancia con el 57 de la Ley 2 de 1984, **el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia debe ser adecuadamente sustentado (CSJ SL9512-2017). Es decir, sobre el recurrente pesa la carga de exponer y clarificar los motivos de su inconformidad, además de «...sustentar en forma más o menos detallada las razones con las que procura se le conceda su aspiración...»** (CSJ SL7220-2016), sin necesidad, eso sí, de acudir a fórmulas sacramentales, de manera que un recurso ordinario se convierta en extraordinario (CSJ SL, 10 ag. 2010, rad. 34215, CSJ SL13179-2015, CSJ SL818-2018, entre otras).

Esa carga de sustentación, vale la pena resaltarlo, debe respetar un *marco de coherencia general*, trazado por el objeto del proceso previamente delineado en la instancia, y un *marco de coherencia especial*, definido por las decisiones y motivaciones de la decisión que se impugna. Es decir que, por regla, como lo reclama la censura, a pesar de que el recurso de apelación no es un medio de impugnación técnico, que deba seguir formas rigurosas, al hacer uso del mismo el recurrente tiene que ser fiel con el marco del proceso y de la decisión a la que se refiere, aclarando cuáles son los puntos materia de su inconformidad y las razones que tiene para ello. Ha dicho la Corte en este punto que **«...la sustentación no es una formalidad sino una exigencia de racionalidad de la demanda de justicia, de fijar los puntos que distancian al recurrente de la decisión del juez y las razones por las cuales esa decisión debe ser revocada.»** (CSJ SL, 26 jun. 2006, rad. 26936).

En concordancia con lo anterior, **a partir del artículo 66 A del CPTSS, el legislador restringe la competencia del juzgador de segundo grado al análisis de «...las materias objeto del recurso de apelación...»**, lo que, según ha precisado esta sala de la Corte, supone que **«...le está vedado a dicho fallador pronunciarse sobre aspectos ajenos o extraños a éstos, pues ello comportaría un claro desconocimiento al debido proceso de la contraparte y una directa vulneración de las referidas disposiciones...»**, lo cual, sin embargo, no significa que **«...no pueda apartarse de la calificación jurídica que sobre determinada realidad fáctica proponga la parte recurrente, por lo que si bien debe someterse en estricto rigor a las temáticas apeladas y sustentadas, no necesariamente debe acoger en su pronunciamiento el análisis jurídico propuesto por la parte...»** (CSJ SL13260-2015)..."

Debiéndose concluir de lo antes citado, que la apelante tenía, como ya se dijo la obligación de fundamentar correctamente el recurso de apelación en materia laboral, ya que es una carga procesal ineludible so pena de que el mismo no pueda ser conocido por el superior, debido a que su competencia está legalmente restringida a los motivos de inconformidad de la providencia debidamente sustentados, así que al no haberse cumplido a

cabalidad esta exigencia, se deberá confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia, modificando el valor a descontar del retroactivo pensional correspondiente a la suma de \$125'304.310 recibida por la demandante por concepto de devolución de saldos, debidamente indexada al momento de hacer efectiva la compensación.

Costas de segunda instancia a cargo de COLFONDOS S.A. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

### 3 FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

**PRIMERO: MODIFICAR** el valor a descontar del retroactivo pensional correspondiente a la suma de \$125'304.310 recibida por la demandante por concepto de devolución de saldos, debidamente indexada al momento de hacer efectiva la compensación.

**SEGUNDO:** En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

**TERCERO:** Costas de segunda instancia a cargo de COLFONDOS S.A. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

Lo decidido se notifica por EDICTO.

Los Magistrados,



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE